

## Sector

# Fopa respalda el modelo de gestión directa del suelo para reducir plazos

La asociación considera que la figura que impulsa el Consell reactivará la obra pública en la provincia y creará nuevas áreas industriales

ANA JOVER

La falta de oferta de vivienda tiene muchos cuellos de botella. El primero es el desarrollo del planeamiento urbanístico de los municipios. Ciudades como Alicante está a la espera de un Plan General de Ordenación Urbana desde finales de los ochenta y otras, como Dénia, se enfrenta desde hace años a continuos retrocesos temporales porque los juzgados tumban su propuesta. No obstante, aunque el diseño esté hecho, el segundo paso que es el desarrollo del suelo es igual de farragoso y, ahí, es donde entra la obra civil.

«El urbanismo está muy bloqueado por la gestión», subraya Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obra Pública de la provincia de Alicante (Fopa). Su visión es pesimista y lo argumenta con dos puntos: los continuos cambios normativos y la escasa inversión en obra pública en los últimos años. Los datos le respaldan a tenor de los ejemplos, por eso no es de extrañar que los empresarios del sector vean con optimismo la propuesta que el Consell les ha puesto encima de la mesa para reactivar la actividad.

El director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, apostó en un foro con la federación y el des-

pacho de Garrigues por la herramienta de la gestión directa como mecanismo para la «generación de nuevo suelo de calidad, sin renunciar a la protección y exigencias medioambientales». La figura ya existe en la actual ley valenciana (Lotup) aprobada por el Botànic y ahora el Consell de Carlos Mazón la ha situado como «modelo preferente».

## Colaboración

Básicamente, es una herramienta de la que disponen las administraciones para gestionar planes parciales o planes de actuación integrada (PAI) a la que suelen renunciar para evitar las complicaciones de gestionar suelo, pagar el coste de las obras y, lo más complicado, poner de acuerdo a todos los propietarios.

La ley permite que, por ejemplo, un ayuntamiento pueda sacar a concurso la gestión de ese planeamiento que es lo que se promueve ahora. Así la empresa constructora se convertiría en urbanizador también de la zona. Además el gestor puede cobrar en suelo y dinero. En definitiva, el encargo público pasa a gestión privada y, a priori, se reducen tiempos para que un barrio pueda disponer de calles, alcantarillado, y otros.

Para Ivorra, el efecto más importante es la agilidad administrativa, la aceleración en los procesos



Javier Gisbert durante el foro con Miguel Ángel Ivorra y Rubén Navarro (Garrigues)

## El presidente de la federación denuncia que el «urbanismo está bloqueado por la gestión»

de concesión y tramitación y, en consecuencia, en la reducción de los costes. Para Gisbert, se puede reactivar el sector, pues no solo se refiere a suelo urbano, sino también a otros tipos de suelo.

«No es una figura conocida, pero hay dos ejemplos en la provincia como es la ampliación del área industrial en Ibi, que tiene mucho

sentido que se haga, desde el impulso público, y la nueva zona de desarrollo de La Nucía», explica el presidente de Fopa.

## Sin suelo industrial

El presidente de Fopa comenta el caso de Ibi, pero en la lista está la farragosa ampliación del parque empresarial de Elche que lleva años en la ruleta de informes y de contrainformes. «Hasta un año puede tardar una administración en contestarte que no le afecta», denuncia.

Por otra parte, está el caso mencionado de La Nucía. El representante de la asociación se refiere al sector La Serreta, un abal de cerca de dos millones de metros cua-

drados en el municipio que tras 20 años y un largo litigio el Ayuntamiento ha acabado haciendo vía gestión directa. Ivorra es conocedor del proceso, porque era concejal de Urbanismo en esta localidad alicantina.

Javier Gisbert indica que este tema «es de alto interés para el sector, en concreto en un momento donde es necesario actualizar los modos de gestión de suelo donde los trámites administrativos y burocráticos ralentizan el desarrollo de iniciativas, tanto privadas como públicas. Además, considera que la gestión directa abre nuevos horizontes al sector, «que ha estado prácticamente parado desde 2008». ■

GABRIEL UBIETO

## Acuerdo inicial

# El Gobierno ultima una oferta pública de empleo de más de 40.000 plazas

Escrivá negocia con las centrales una lista de plazas ligeramente superior a la aprobada

El Gobierno ha trasladado a los sindicatos más representativos en la función pública una propuesta para la oferta pública de empleo del 2024. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ultima una lista de más de 40.000 plazas para este ejercicio, un número ligeramente superior a las publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del año pasado,

cuando la oferta ascendió a 39.574. La intención del ministerio liderado por José Luis Escrivá es llevar la lista definitiva de plazas a un «próximo» Consejo de Ministros. «Con este volumen de empleo, que incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna, se garantiza la generación de empleo neto», apuntan fuentes de su departamento.

La propuesta gubernamental satisface, a falta del acuerdo definitivo, a parte de los sindicatos ne-

gociantes. UGT ha emitido un comunicado en el que se muestra «satisfecha» con la cifra. Y detalla que de las 40.121 plazas que les han remitido en la última propuesta, 20.840 serán de turno libre, y al menos 10.600 corresponderán a promoción interna.

La aprobación en el Consejo de Ministros significará desatascar una demanda que el año pasado se dio a conocer en diciembre de 2022 y que, en la actualidad, ha sufrido un importante retraso en la adjudicación de plazas. ■